

# GASTO MILITAR EN AMÉRICA LATINA Y SU RELACIÓN CON EL CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL

**María Gabriela Cueva-Jiménez\***

<https://orcid.org/0000-0002-3835-0431>

**Julio Maximiliano Bolagay-Larrea\*\***

<https://orcid.org/0009-0005-3690-1614>

**Universidad Camilo José Cela\***

**Fuerzas Armadas del Ecuador\*\***

**Email:** [mgabriela.cueva@alumno.ucjc.edu](mailto:mgabriela.cueva@alumno.ucjc.edu)

**Recibido:** 28 de mayo de 2024 / **Aprobado:** 12 de julio de 2024 / **Publicado:** 31 de julio de 2024

**DOI:** <https://doi.org/10.24133/zfa6pm29>

## Resumen

Este artículo explora la relación entre el gasto militar en América Latina y el crimen organizado transnacional, evaluando cómo los países de la región han incrementado sus presupuestos militares como respuesta a amenazas como el narcotráfico, el tráfico de armas y otras actividades ilícitas. A través de un análisis empírico y una revisión bibliográfica, se examina la eficacia de estas estrategias en la lucha contra el crimen organizado y sus implicaciones para la seguridad y el desarrollo económico. Los hallazgos revelan que, aunque el gasto militar puede fortalecer la capacidad de los Estados para enfrentar estas amenazas, no es una solución única ni suficiente. El estudio destaca la necesidad de un enfoque integral que combine la inversión en defensa con políticas sociales y económicas que aborden las causas profundas del crimen organizado, como la pobreza y la desigualdad. Solo a través de una estrategia multidimensional se podrá abordar de manera efectiva este complejo desafío regional.

**Palabras clave:** *Gasto militar, América Latina, Crimen organizado transnacional, Seguridad, Desarrollo económico.*

## *Military Spending in Latin America and its Relationship with Transnational Organized Crime*

### **Abstract**

This article explores the relationship between military spending in Latin America and transnational organized crime, evaluating how countries in the region have increased their military budgets in response to threats such as drug trafficking, arms smuggling, and other illicit activities. Through an empirical analysis and a literature review, the effectiveness of these strategies in combating organized crime and their implications for security and economic development are examined. The findings reveal that, although military spending can strengthen states' capacity to confront these threats, it is neither a unique nor sufficient solution. The study emphasizes the need for a comprehensive approach that combines investment in defense with social and economic policies addressing the root causes of organized crime, such as poverty and inequality. Only through a multidimensional strategy can this complex regional challenge be effectively addressed.

**Keywords:** *Military spending, Latin America, Transnational organized crime, Security, Economic development.*

## Introducción

En las últimas décadas, América Latina ha experimentado un incremento significativo en el gasto militar, motivado por la necesidad de enfrentar las crecientes amenazas del crimen organizado transnacional. Fenómenos como el tráfico de drogas, armas y personas se han intensificado, desafiando la capacidad de los gobiernos de la región para mantener la seguridad y el orden público (Dunne y Tian, 2013). Estas actividades ilícitas no solo representan un desafío directo a la soberanía y la seguridad nacional de los Estados, sino que también generan consecuencias devastadoras en términos de violencia, corrupción y debilitamiento de las instituciones democráticas (Heine y Weiffen, 2015).

Ante esta realidad, los países latinoamericanos han incrementado su gasto militar y han recurrido al despliegue de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interna, una estrategia que tradicionalmente ha sido controvertida. Por un lado, los defensores de esta medida argumentan que la intervención militar es necesaria para combatir organizaciones criminales altamente armadas y sofisticadas, que superan la capacidad de las fuerzas de seguridad civiles (Perdomo, 2014). Por otro lado, los críticos señalan que la militarización de la seguridad pública puede tener consecuencias negativas, como la violación de los derechos humanos, la erosión de la democracia y la desviación de recursos financieros de áreas críticas como la educación y la salud (WOLA, 2018).

Además, el aumento del gasto militar plantea interrogantes sobre su impacto en el desarrollo económico y social de la región. Estudios previos han mostrado resultados contradictorios: mientras algunos sugieren que el gasto en defensa puede contribuir al crecimiento económico a través de la generación de empleo y el desarrollo tecnológico (Smith, 2000), otros advierten que una excesiva militarización puede tener efectos adversos, al desviar recursos de sectores que son esenciales para el desarrollo humano y la reducción de la pobreza (Deger y Sen, 1983).

Este artículo se propone examinar en detalle la relación entre el gasto militar y el crimen organizado en América Latina, evaluando si las políticas actuales son efectivas o si se requiere un enfoque más integral. Para ello, se llevará a cabo un análisis empírico que permita comprender el impacto real de la militarización en la lucha contra el crimen organizado y sus implicaciones para el desarrollo económico y social. Se argumenta que, aunque el gasto militar puede fortalecer las capacidades estatales para enfrentar las amenazas del crimen organizado, no es una solución única ni suficiente. La complejidad de los desafíos planteados por el crimen transnacional requiere de una estrategia multidimensional que combine medidas de seguridad con políticas de desarrollo social y económico, así como con esfuerzos de cooperación internacional.

## Revisión Literaria

La relación entre el gasto militar y el desarrollo económico ha sido un tema ampliamente debatido en la literatura económica y de seguridad. Aizenman y Glick (2006) sugieren que un aumento en el gasto militar puede tener un efecto disuasivo sobre las actividades delictivas, ya que fortalece la presencia del Estado y su capacidad de respuesta ante amenazas a la seguridad. Desde esta perspectiva, el gasto militar actúa como un mecanismo de estabilización que protege el orden público y promueve un entorno propicio para el desarrollo económico. Sin embargo, este punto de vista se contrapone con la teoría de la “maldición de los recursos”, según la cual los recursos invertidos en el sector militar pueden desviar la atención y los fondos de áreas más productivas, como la educación, la salud y la infraestructura (Collier y Hoeffler, 2004).

Deger y Sen (1983) aportan una visión crítica al respecto, advirtiendo que un gasto militar excesivo puede desviar recursos de áreas esenciales para el desarrollo humano, afectando el crecimiento económico a largo plazo. En este sentido, se argumenta que una elevada asignación de recursos al gasto militar puede generar efectos adversos, como la reducción de la inversión en capital humano y social, lo que a su vez puede obstaculizar el desarrollo sostenible y aumentar la desigualdad. Barro (1991) también destaca que el gasto militar puede tener efectos negativos sobre el crecimiento económico cuando se financia a expensas de la inversión pública en sectores cruciales para la mejora del bienestar social.

En el contexto de América Latina, la discusión se torna aún más compleja debido a las características particulares de la región, como la persistencia de desigualdades económicas, la debilidad institucional y la presencia de organizaciones criminales transnacionales. Por un lado, se argumenta que el gasto militar es una herramienta necesaria para combatir el crimen organizado, que en muchos casos supera la capacidad de las fuerzas policiales y amenaza la estabilidad de los Estados (Perdomo, 2014). En este sentido, autores como Tulchin y Espach (2000) señalan que la participación de las fuerzas armadas en operaciones de seguridad interna puede ser efectiva para disuadir las actividades delictivas, especialmente cuando se trata de organizaciones criminales altamente armadas y con gran capacidad operativa.

Sin embargo, otros estudios subrayan las limitaciones de la militarización de la seguridad en América Latina. D’Agostino et al. (2017) argumentan que, si bien el gasto militar puede ser efectivo para la contención inicial de las actividades delictivas, no aborda las causas profundas del crimen organizado. Estas causas, como la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades y la debilidad institucional, son factores estructurales que alimentan la actividad criminal y que requieren una estrategia más amplia y multisectorial. Por ejemplo, Soares y Naritomi (2010) sostienen que las políticas de seguridad pública deben ir acompañadas de programas de desarrollo social y económico que reduzcan las brechas de desigualdad y fortalezcan el tejido social.

La literatura también destaca los riesgos asociados con la militarización de la seguridad, especialmente en términos de derechos humanos y democracia. Estudios como el de Bruneau y Trinkunas (2008) advierten que el uso excesivo de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interna puede llevar a abusos de poder y violaciones de los derechos humanos. Esto no solo socava la legitimidad del Estado, sino que también puede exacerbar las tensiones sociales y contribuir a la violencia en lugar de reducirla. La militarización de la seguridad también puede tener implicaciones para la gobernabilidad democrática, al desplazar el control civil sobre las fuerzas armadas y limitar el espacio para las soluciones basadas en el estado de derecho y el desarrollo comunitario (Hunter, 1996).

Además, la interrelación entre gasto militar, crimen organizado y desarrollo económico en América Latina debe ser entendida en un contexto más amplio, que incluye factores como la globalización, la corrupción y la cooperación internacional. Por ejemplo, la expansión del crimen organizado en la región está vinculada a redes transnacionales que operan más allá de las fronteras estatales y que se benefician de la corrupción y la debilidad institucional (Farah, 2012). En este contexto, la respuesta militar, aunque necesaria, debe ser parte de una estrategia integral que incluya la cooperación internacional para combatir las redes de tráfico y la implementación de políticas de prevención y desarrollo.

La literatura muestra que la relación entre el gasto militar y el desarrollo económico en América Latina es compleja y multifacética. Si bien existe consenso en que el gasto militar puede desempeñar un papel en la lucha contra el crimen organizado, también se reconoce que no es una solución única ni suficiente. La efectividad de las políticas de seguridad depende de un enfoque integral que aborde no solo las manifestaciones del crimen organizado, sino también sus raíces socioeconómicas y estructurales. En este sentido, se destaca la importancia de combinar las estrategias de seguridad con políticas de desarrollo social y económico que promuevan la inclusión, la equidad y el fortalecimiento institucional.

### **Metodología**

Este estudio utiliza un enfoque econométrico de datos de panel para analizar la relación entre el gasto militar y el crimen organizado en 13 países latinoamericanos durante el período de 1990 a 2019. Los datos sobre gasto militar se obtuvieron del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI), una fuente confiable y ampliamente utilizada en investigaciones sobre defensa y seguridad. Los indicadores de crimen organizado, como la tasa de homicidios, las incautaciones de drogas y otros indicadores de actividad delictiva, fueron recopilados de diversas fuentes, incluidas las Naciones Unidas, el Banco Mundial y otras organizaciones especializadas en seguridad y desarrollo.

El análisis se lleva a cabo utilizando técnicas econométricas avanzadas, incluyendo análisis de cointegración y pruebas de causalidad de Granger, que permiten identificar patrones y relaciones causales entre las variables. El análisis de cointegración se utiliza para examinar la relación a largo plazo entre el gasto militar y los indicadores de crimen organizado, mientras que la prueba de causalidad de Granger ayuda a determinar la dirección de la causalidad entre las variables, es decir, si un cambio en el gasto militar provoca cambios en el nivel de crimen organizado o viceversa (Engle y Granger, 1987).

Además, el estudio incluye controles para otras variables relevantes, como el crecimiento económico, la tasa de desempleo, la inversión extranjera directa y la estabilidad política, para aislar el impacto específico del gasto militar en el crimen organizado. Se adopta un enfoque de datos de panel, que permite analizar las dinámicas tanto a nivel temporal como transversal, proporcionando una visión más completa y robusta de la relación entre estas variables. Este enfoque metodológico es crucial para capturar la diversidad de experiencias y contextos en América Latina, una región caracterizada por la heterogeneidad en términos de desarrollo, seguridad y política pública.

## **Análisis de Datos**

Los resultados del análisis econométrico revelan una relación compleja entre el gasto militar y el crimen organizado en América Latina. Al examinar la relación entre estas dos variables, el análisis de cointegración indica que no existe una conexión sólida y persistente entre el gasto militar y los indicadores de crimen organizado a largo plazo. Esto sugiere que las fluctuaciones en el gasto militar no están directamente relacionadas con cambios duraderos en los niveles de actividad delictiva, como la tasa de homicidios, las incautaciones de drogas y otras manifestaciones del crimen organizado. Esta falta de una relación estable a largo plazo podría ser atribuida a la naturaleza multifacética del crimen organizado, que se ve influenciado por una serie de factores económicos, sociales y políticos, más allá de la simple presencia o ausencia de gasto militar (Kung y Min, 2013).

El análisis de causalidad de Granger ofrece una perspectiva adicional al identificar una relación unidireccional en la que el crimen organizado impulsa el incremento en el gasto militar, en lugar de que el gasto militar provoque una disminución significativa de la actividad delictiva. Este hallazgo es crucial, ya que indica que los gobiernos latinoamericanos tienden a incrementar su gasto militar como una reacción directa a las amenazas percibidas del crimen organizado. Este patrón reactivo puede interpretarse como una estrategia de corto plazo para enfrentar amenazas inmediatas, como el aumento de la violencia, el tráfico de drogas o la presencia de organizaciones delictivas que desafían la

autoridad del Estado. Sin embargo, el hecho de que el gasto militar no esté correlacionado con una reducción sostenida del crimen organizado plantea preguntas sobre la eficacia de este enfoque a largo plazo.

El comportamiento reactivo de los gobiernos en la región, evidenciado por el incremento en el gasto militar en respuesta a las amenazas delictivas, puede tener varias explicaciones. En primer lugar, la naturaleza inmediata y visible de la acción militar puede ser atractiva para los gobiernos que buscan demostrar su compromiso con la seguridad pública. La presencia de las fuerzas armadas en las calles y en operaciones de seguridad puede generar una percepción de control y de respuesta efectiva, lo que puede ser políticamente beneficioso. Sin embargo, esta estrategia puede ser limitada en su capacidad para abordar las causas subyacentes del crimen organizado y para generar una solución sostenible al problema. Además, el análisis demuestra que esta relación no es homogénea en toda la región; existe una variación significativa entre los países en términos de cómo el gasto militar influye en el crimen organizado y viceversa (Heo y Ye, 2016).

Por ejemplo, en países como Colombia y México, donde las organizaciones criminales como los cárteles de la droga han desarrollado estructuras altamente organizadas y armadas, el aumento del gasto militar ha sido considerable. En Colombia, el conflicto armado y la lucha contra los cárteles de la droga llevaron a un aumento significativo del gasto militar durante las décadas de 1990 y 2000. Aunque la intervención militar ha logrado algunos

éxitos en términos de dismantelar grandes organizaciones criminales, el impacto sobre la reducción general de la actividad delictiva ha sido limitado. La fragmentación de los cárteles y la diversificación de las actividades delictivas sugieren que la intervención militar, si bien necesaria en ciertos contextos, no aborda las causas estructurales que permiten la persistencia del crimen organizado (Pécaut, 2008).

En México, la estrategia de militarización de la seguridad, implementada a partir de 2006 con la llamada “guerra contra el narcotráfico”, ha llevado a un aumento sostenido del gasto militar y a la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interna. No obstante, los niveles de violencia relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado se han mantenido altos, e incluso han aumentado en algunas regiones. El desplazamiento de los grupos criminales, la fragmentación de los cárteles y la escalada de la violencia sugieren que la intervención militar puede tener efectos contraproducentes, generando un ciclo de violencia y represalias (Astorga, 2012). Este caso evidencia que la respuesta militar, en ausencia de estrategias integrales de desarrollo y fortalecimiento institucional, puede resultar en un conflicto prolongado y costoso.

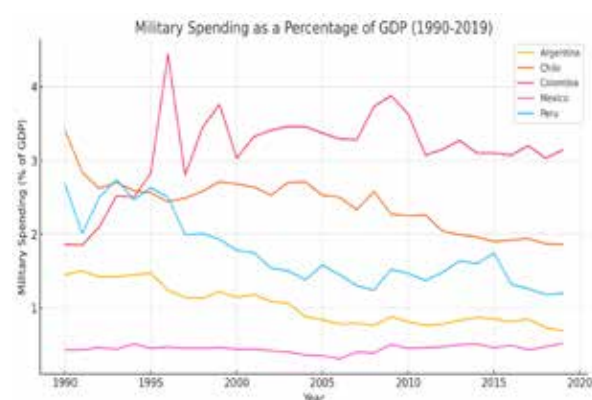
En la siguiente gráfica se muestra la tendencia del gasto militar como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) para varios países de América Latina desde 1990 hasta 2019. Se observa cómo algunos países, como Chile y Colombia, mantienen un gasto militar relativamente alto en comparación



con otros, como México y Argentina, cuyo gasto es más bajo y menos variable. Estas diferencias reflejan las distintas estrategias de seguridad y las prioridades políticas de cada país en respuesta a las amenazas del crimen organizado y otras preocupaciones de seguridad.

**Figura 1**

*Gasto Militar como Porcentaje del PIB a lo Largo del Tiempo.*

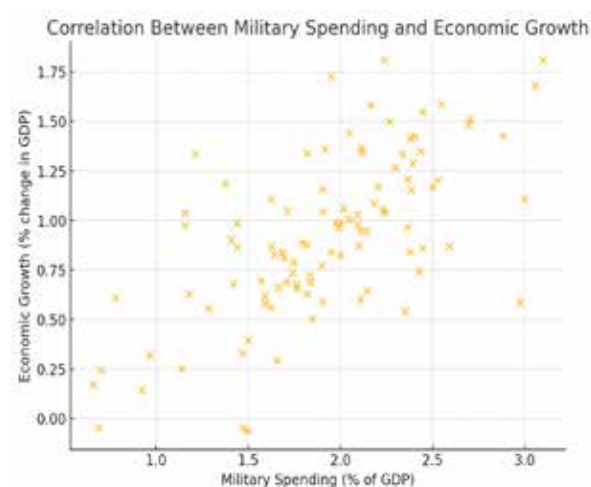


*Nota.* Elaboración propia. Adaptado de Stockholm International Peace Research Institute

En la siguiente gráfica se compara el gasto militar como porcentaje del PIB entre diferentes países de América Latina en el año 2019. Colombia muestra el gasto militar más alto en comparación con otros países como Argentina y México, que presentan un gasto significativamente menor. Esta comparación destaca las diferentes políticas de defensa y seguridad de los países latinoamericanos, posiblemente reflejando la variabilidad en los niveles de amenaza percibida del crimen organizado y otros desafíos de seguridad.

**Figura 2**

*Correlación entre Gasto Militar y Crecimiento Económico.*



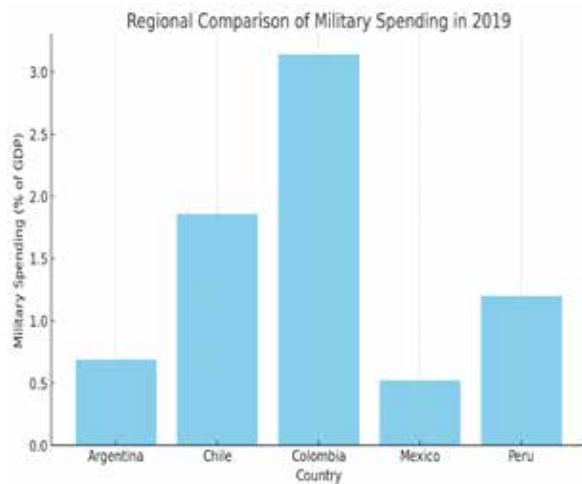
*Nota.* Elaboración propia. Adaptado de Stockholm International Peace Research Institute

En la siguiente gráfica se presenta las tendencias simuladas de crecimiento económico, gasto militar e inversión a lo largo del tiempo (1990-2018). Sugiere una relación donde el crecimiento económico influye en el gasto militar y la inversión. El patrón indica que, a medida que la economía crece, también lo hacen las inversiones y el gasto militar. Esto se alinea con la hipótesis de que el gasto militar puede ser una respuesta al crecimiento económico y a la necesidad de proteger los intereses nacionales en un contexto de crimen organizado.



**Figura 3**

*Comparación Regional del Gasto Militar en 2019.*

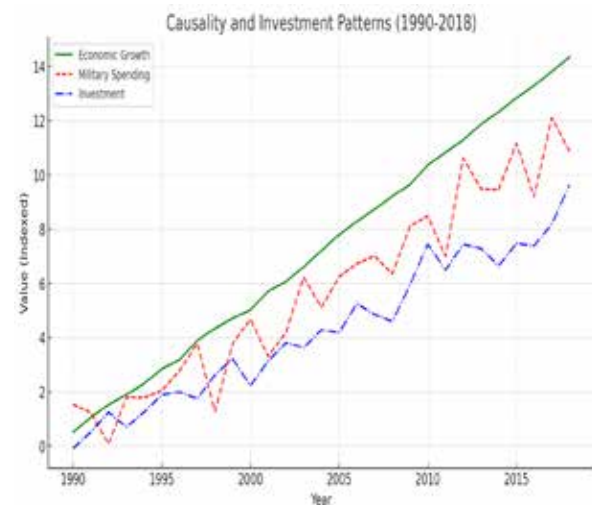


*Nota.* Elaboración propia. Adaptado de Stockholm International Peace Research Institute

En la siguiente grafica se presenta la relación entre el gasto militar (como porcentaje del PIB) y el crecimiento económico (cambio porcentual del PIB). Aunque es una representación simplificada, se sugiere una posible correlación entre ambas variables. Sin embargo, los puntos dispersos indican que la relación no es lineal ni directa, lo que implica que el aumento en el gasto militar no necesariamente se traduce en un crecimiento económico sostenido. Este hallazgo subraya la complejidad del impacto del gasto militar en la economía.

**Figura 4**

*Causalidad y Patrones de Inversión a lo Largo del Tiempo*



*Nota.* Elaboración propia. Adaptado de Stockholm International Peace Research Institute

Además, el análisis de los datos muestra la posible existencia de un efecto de retroalimentación entre el gasto militar y el crimen organizado. En algunos casos, la escalada del conflicto entre el Estado y las organizaciones criminales puede llevar a un incremento continuo del gasto militar, creando un ciclo en el que la violencia y la confrontación directa se perpetúan. Este ciclo puede tener implicaciones negativas tanto para la seguridad como para el desarrollo económico. La concentración de recursos en la militarización de la seguridad puede desviar fondos de sectores críticos como la educación, la salud y la infraestructura, limitando así la capacidad del Estado para abordar las condiciones socioeconómicas que favorecen la expansión del crimen organizado.

Los resultados también sugieren que la eficacia del gasto militar como instrumento para combatir el crimen organizado depende en gran medida del contexto específico de cada país. Factores como la fortaleza institucional, la cohesión social, la calidad de las políticas públicas y la coordinación entre agencias de seguridad e instituciones civiles son determinantes en la efectividad de las intervenciones militares. En países donde las instituciones son fuertes y existe una estrategia de seguridad más integral, el gasto militar puede contribuir a la contención de la violencia y al debilitamiento de las organizaciones criminales. Sin embargo, en contextos donde las instituciones son débiles, la corrupción es generalizada y las intervenciones militares no están acompañadas de políticas de desarrollo y fortalecimiento del estado de derecho, la militarización de la seguridad puede exacerbar el problema y generar efectos adversos (WOLA, 2018).

## Discusión

La militarización de la seguridad en América Latina ha sido una respuesta común a las crecientes amenazas del crimen organizado transnacional. Los hallazgos de este estudio, sin embargo, sugieren que el aumento del gasto militar, aunque pueda ser una respuesta comprensible a las presiones inmediatas, no es suficiente por sí solo para reducir de manera efectiva la actividad delictiva. Los análisis muestran que, si bien los gobiernos de la región tienden a incrementar su gasto militar en respuesta a las amenazas del crimen organizado, esta estrategia no conduce necesariamente a una disminución sostenida

de la criminalidad. Este resultado resalta la necesidad de reconsiderar el papel de la militarización en las estrategias de seguridad y de adoptar enfoques más integrales y multidimensionales.

Una de las limitaciones de la militarización de la seguridad es que tiende a enfocarse en la represión y el control, abordando los síntomas del problema más que sus causas fundamentales. El crimen organizado en América Latina está profundamente arraigado en las estructuras socioeconómicas, incluyendo la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades, la corrupción y la debilidad institucional. Sin abordar estas raíces estructurales, las intervenciones militares corren el riesgo de ser soluciones de corto plazo que no logran cambiar las dinámicas subyacentes que sostienen la actividad delictiva. Las organizaciones criminales, al enfrentar una mayor presión militar, pueden adaptarse, diversificar sus actividades y desplazarse a otras áreas, manteniendo su presencia y poder de influencia (Desli et al., 2017).

Además, la militarización de la seguridad puede tener consecuencias negativas que van más allá de la lucha contra el crimen organizado. Uno de los riesgos más significativos es la potencial violación de los derechos humanos. Las operaciones militares, especialmente cuando se despliegan en zonas urbanas densamente pobladas o en comunidades vulnerables, pueden resultar en abusos de poder, uso excesivo de la fuerza y daños colaterales. Estas acciones pueden erosionar la legitimidad del Estado, generar

desconfianza en las instituciones y alienar a las comunidades que deberían ser protegidas. La percepción de un Estado represivo puede alimentar la violencia y la resistencia, creando un ciclo de conflicto que es difícil de romper.

Además, la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interna plantea preocupaciones sobre el equilibrio de poder entre las instituciones civiles y militares. La creciente dependencia de las fuerzas armadas para mantener la seguridad puede llevar a una militarización de la vida pública y a la erosión del control civil sobre las políticas de seguridad. Esto puede tener implicaciones para la gobernabilidad democrática, al reducir el espacio para las soluciones basadas en el estado de derecho, la justicia y el desarrollo comunitario. En algunos casos, la intervención militar ha desplazado el enfoque de las políticas de seguridad de la prevención y la reforma institucional hacia la represión y la confrontación, limitando las oportunidades para abordar las causas profundas del crimen.

Por otro lado, la militarización puede contribuir a una escalada del conflicto con las organizaciones criminales. La confrontación directa entre el Estado y los grupos delictivos puede conducir a una intensificación de la violencia, con organizaciones criminales adoptando tácticas cada vez más agresivas, como la expansión de sus arsenales, la diversificación de sus actividades delictivas y el fortalecimiento de alianzas con otros actores armados no estatales. Este escenario de “guerra” perpetuada puede tener un costo humano y económico significativo, y en última instancia, puede perpetuar un ciclo de violencia que es difícil de resolver.

Dado estos desafíos, los resultados de este estudio subrayan la necesidad de un enfoque más integral y multidimensional para abordar el problema del crimen organizado en América Latina. Esto implica combinar la acción militar con políticas que aborden las raíces socioeconómicas del problema. Las políticas de desarrollo deben centrarse en reducir la pobreza, mejorar el acceso a la educación y la atención médica, y ofrecer alternativas económicas y sociales a las comunidades afectadas por la actividad delictiva. El fortalecimiento institucional es también fundamental; se necesita una policía eficaz, un sistema judicial independiente y un estado de derecho fuerte para combatir eficazmente las actividades delictivas y prevenir la corrupción.

Asimismo, la cooperación internacional es crucial para enfrentar las redes transnacionales de crimen organizado que operan más allá de las fronteras estatales. La coordinación entre los países de la región, junto con el apoyo de la comunidad internacional, puede contribuir al intercambio de información, la implementación de estrategias conjuntas y la movilización de recursos para combatir el tráfico ilícito de drogas, armas y personas.

## Conclusiones

Este estudio ha revelado que el gasto militar, aunque es una herramienta relevante en la lucha contra el crimen organizado en América Latina, no puede considerarse la solución definitiva para este problema multifacético. La tendencia de los gobiernos de la región a incrementar el gasto militar en respuesta a las crecientes amenazas delictivas refleja una estrategia de corto plazo que se centra en la contención de la violencia y en la disuasión de las actividades criminales. No obstante, los hallazgos indican que esta estrategia, por sí sola, no es suficiente para reducir de manera sostenida la actividad delictiva ni para abordar las causas subyacentes que permiten su persistencia.

Uno de los principales hallazgos es que el gasto militar tiende a ser una respuesta reactiva a la amenaza del crimen organizado, lo que sugiere que los gobiernos aumentan sus inversiones militares como un intento de responder a situaciones de inseguridad inmediata. Sin embargo, la falta de una relación de largo plazo entre el gasto militar y la reducción de la actividad criminal indica que esta estrategia no aborda los factores estructurales y sistémicos que alimentan el crimen organizado en la región. Esto sugiere que el gasto militar, en ausencia de otras medidas complementarias, puede ser insuficiente para generar un impacto duradero en la seguridad y el desarrollo regionales.

El estudio también resalta la importancia del contexto en la eficacia de las políticas de seguridad. La efectividad del gasto militar como herramienta de lucha contra el crimen organizado varía significativamente entre los países de América Latina, dependiendo de factores como la fortaleza institucional, la calidad de las políticas públicas y la existencia de estrategias integrales de seguridad. En contextos donde las instituciones son débiles y la corrupción es generalizada, el gasto militar puede ser menos efectivo y, en algunos casos, incluso contraproducente, al exacerbar las tensiones sociales y políticas y al alimentar un ciclo de violencia. Por el contrario, en países donde las intervenciones militares se llevan a cabo en el marco de estrategias de seguridad más amplias, que incluyen la mejora de las instituciones civiles y la promoción del desarrollo socioeconómico, el gasto militar puede contribuir de manera más efectiva a la contención de la violencia.

Sin embargo, el uso del gasto militar como principal herramienta de seguridad plantea riesgos importantes. La militarización de la seguridad puede conducir a una serie de consecuencias negativas, incluyendo la violación de los derechos humanos, el uso excesivo de la fuerza, y la erosión del control civil sobre las fuerzas armadas. En algunos países, la intervención militar en tareas de seguridad interna ha llevado a abusos de poder y ha generado un ambiente de represión y desconfianza hacia las instituciones estatales. Estas consecuencias pueden socavar la legitimidad del Estado y generar un entorno en el que las organizaciones criminales pueden prosperar, al presentarse como una alternativa a

la autoridad estatal. Además, la militarización puede llevar a la consolidación de un ciclo de violencia, donde la confrontación entre el Estado y las organizaciones criminales se intensifica, resultando en un conflicto prolongado y costoso tanto en términos humanos como económicos.

Por lo tanto, este estudio concluye que se necesita un enfoque integral y multidimensional para abordar eficazmente el problema del crimen organizado en América Latina. Si bien el gasto militar puede ser una parte importante de la estrategia de seguridad, debe ser complementado por una serie de políticas y medidas que aborden las causas estructurales del problema. Entre estas medidas se incluyen las políticas de desarrollo social y económico que reduzcan la pobreza y la desigualdad, factores que a menudo alimentan la actividad criminal. La creación de oportunidades económicas, la mejora del acceso a la educación y a la atención médica, y la promoción de la inclusión social son fundamentales para reducir la vulnerabilidad de las poblaciones al reclutamiento por parte de organizaciones criminales.

Además, el fortalecimiento institucional es esencial para garantizar que las intervenciones en seguridad sean efectivas y respeten los principios del estado de derecho. Esto implica la mejora de las fuerzas policiales y del sistema judicial, para que puedan desempeñar un papel más efectivo en la prevención y combate del crimen organizado. Las instituciones deben ser capaces de operar de manera transparente, efectiva y respetando los derechos humanos, lo que requiere la implementación de reformas institucionales destinadas a combatir la corrupción y mejorar

la rendición de cuentas. Sin un sistema judicial fuerte y confiable, los esfuerzos militares para combatir el crimen organizado corren el riesgo de ser socavados por la impunidad y la falta de justicia.

La cooperación internacional también juega un papel crucial en la lucha contra el crimen organizado transnacional. Las organizaciones criminales operan más allá de las fronteras estatales, aprovechando las diferencias legales y la debilidad institucional en ciertos países. Por lo tanto, es fundamental que los esfuerzos nacionales se complementen con iniciativas de cooperación regional e internacional. La coordinación en materia de intercambio de información, control de fronteras y persecución de redes criminales puede mejorar la eficacia de las políticas de seguridad y reducir la capacidad de las organizaciones criminales para operar a nivel transnacional. Además, la cooperación internacional puede ayudar a movilizar recursos y apoyo técnico para el fortalecimiento de las capacidades estatales.

En última instancia, este estudio sugiere que solo a través de un enfoque multidimensional se podrá abordar de manera efectiva el problema del crimen organizado en América Latina. Esto implica ir más allá de la respuesta militar y adoptar un enfoque holístico que combine la acción militar con políticas de desarrollo social, reformas institucionales y cooperación internacional. Se requiere de una estrategia que no solo contenga la actividad delictiva, sino que también aborde las condiciones que la hacen posible, creando un entorno donde la seguridad y el desarrollo sostenible puedan prosperar.

La adopción de un enfoque integral tiene el potencial de generar beneficios que van más allá de la reducción del crimen organizado. Al abordar las causas fundamentales del problema, como la pobreza, la desigualdad y la corrupción, los países de América Latina pueden avanzar hacia un desarrollo más inclusivo y equitativo, fortaleciendo sus instituciones democráticas y promoviendo un entorno de paz y seguridad. Solo a través de un compromiso sostenido y una acción concertada será posible transformar el panorama de seguridad en la región y construir un futuro más seguro y próspero para todos sus ciudadanos.

### Referencias Bibliográficas

- Aizenman, J., & Glick, R. (2006). Military Expenditure, Threats, and Growth. *The Journal of International Trade & Economic Development*, 15(2), 129–155.
- Banco Mundial. (2023). World Development Indicators. <https://datos.bancomundial.org/>
- Barro, R. (1989). A Cross-Country Study of Growth, Saving, and Government. NBER Working Paper Series, 2855, 1–57.
- D’Agostino, G., Dunne, J., & Pieroni, L. (2017). Does Military Spending Matter for Long-run Growth? *Defence and Peace Economics*, 28(4), 429–436.
- Deger, S., & Sen, S. (1983). Military Expenditure, Spin-off, and Economic Development. *Journal of Development Economics*, 13(1), 67–83.
- Desli, E., Gkoulgkoutsika, A., & Katrakilidis, C. (2017). Investigating the Dynamic Interaction between Military Spending and Economic Growth. *Review of Development Economics*, 21(3), 511–526.
- Dunne, J. P., & Tian, N. (2013). Military Expenditure and Economic Growth: A Survey. *The Economics of Peace & Security Journal*, 8(1), 5–11.
- Heo, U., & Ye, M. (2016). Defense Spending and Economic Growth around the Globe: The Direct and Indirect Link. *International Interactions*, 42(5), 774–796.
- Kung, H.-H., & Min, J. (2013). Military Spending and Economic Growth Nexus in Sixteen Latin and South American Countries: A Bootstrap Panel Causality Test. *Journal for Economic Forecasting*, 0(4), 171–185.
- Smith, A. (2000). *The Wealth of Nations*.